



Núm. 225
vol. XXXIX
15€

POLÍTICA EXTERIOR

mayo/junio de 2025 • www.politicaexterior.com

América Latina, seguridad y democracia



Democracia y seguridad en América Latina: ¿Cómo salir del túnel?

Guillermo Fernández de Soto y Andrés Rugeles

La defensa de la democracia de América Latina es un imperativo político, ético y moral. Las nuevas amenazas requieren visión de futuro y repensar las reglas, sin olvidar que la democracia se fortalece en democracia y con más democracia.

LA democracia y la seguridad en América Latina afrontan momentos difíciles y profundos cuestionamientos sobre su efectividad. En términos literarios se encuentran en un “túnel”, quizás lo más parecido al de la obra del escritor argentino Ernesto Sábato. Esta novela, marcada por la violencia y una visión metafísica del existir, refleja la necesidad –como la tiene la región– de superar las barreras del encierro y de encontrar su propia luz.

Guillermo Fernández de Soto es presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales CORI, excanciller y exembajador ante Naciones Unidas.

Andrés Rugeles es vicepresidente del (CORI), miembro asociado de la Universidad de Oxford.

El crimen organizado es uno de los mayores riesgos para la democracia latinoamericana. Más allá de este epígrafe, la percepción ciudadana y las cifras corroboran que estamos en una coyuntura crítica. Hoy, el 65% de la población está insatisfecha con los resultados de la democracia



Votante participa en los polémicos comicios directos celebrados en México para elegir jueces, magistrados y ministros a nivel federal y en 19 estados de México. (Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, 1 de junio de 2025). GETTY

y el 40% piensa que puede funcionar sin partidos políticos, parlamento u oposición (Latinobarómetro, 2024).

Y para completar y dramatizar este escenario, debe subrayarse que esta zona es la más violenta del mundo. En efecto, el año pasado, más de 121.000 latinoamericanos fueron asesinados. Uno de cada tres homicidios ocurre en esta parte del planeta, a pesar de que sólo tiene una décima parte de la población mundial. Y 39 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina.

Los datos y las encuestas ratifican, una vez más, el proceso creciente de erosión institucional y deterioro del tejido social. La ciudadanía observa con indiferencia la suerte de su régimen político.

El crimen organizado y la proliferación de la violencia tienen serias repercusiones sobre la consolidación del Estado de derecho, el funcionamiento del sistema político y la generación de actitudes autoritarias que cuestionan la supremacía de los derechos humanos ante las necesidades de afrontar los desafíos

de seguridad. Al respecto, Kevin Casas-Zamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), ha advertido que la interacción entre seguridad y democracia es prioritaria.

Por ello, el fortalecimiento de la democracia y la seguridad se constituyen en uno de los grandes retos hacia futuro y deben ser el epicentro de atención de las políticas públicas en los próximos años. Se debe evitar que la democracia se convierta en un cascaron vacío, insulso e inerme.

CRISIS DE LA DEMOCRACIA

EL proceso que está viviendo la región no es ajeno a las tendencias mundiales. Analistas y expertos internacionales han alertado sobre la crisis global de la democracia y del auge de las dictaduras.

El más reciente índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de la revista *The Economist* (EIU) reafirma el declive global de la democracia y el fortalecimiento del autoritarismo. En 2024, sus números alcanzaron los niveles más bajos. El deterioro se hace cada vez más notorio en las categorías de libertades civiles, procesos electorales y pluralismo. Un dato que causa preocupación está relacionado con el hecho de que sólo el 6,6% de la población mundial vive en democracias plenas. Todo indica que los dictadores le están ganando la partida a los demócratas. Sin embargo, guardamos la esperanza de que no salgan victoriosos de esta batalla.

Mientras tanto, los hallazgos de los estudios del proyecto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) apuntan en la misma dirección. Para esta prestigiosa casa de estudios, el 71% de la población mundial (5.700 millones) vive en autocracias y los niveles actuales de democracia por persona han retrocedido a los de 1985. Es decir, se han perdido cuatro décadas. El énfasis está puesto en dos ejes que resultan críticos: instituciones y derechos. En tal sentido, libertad de expresión, elecciones transparentes y libertades de asociación están bajo escrutinio. Sin embargo, los análisis hacen marcadas diferencias por región, en cuyo caso Asia del Este y el Pacífico, Asia Central y del Sur, y Oriente Medio son las más afectadas por la epidemia del autoritarismo.

IDEA Internacional, por su parte, brinda nuevos elementos de análisis en su más reciente reporte (2024), al subrayar que la calidad de los sistemas elec-

torales en un gran número de países está en un proceso de declive, así como su credibilidad. Esto ha llevado a que los resultados de las elecciones se cuestionen abiertamente: una de cada cinco en el mundo. Es decir, los comicios están sometidos –según esta organización– a amenazas que se relacionan con elementos digitales, políticos y proliferación del negacionismo electoral. Asimismo, se están deteriorando áreas centrales como la representatividad y los derechos (igualdad económica, libertad de expresión y libertad de prensa).

¿Qué ha pasado? ¿Se invirtió la escala de valores de nuestras sociedades? Las causas son múltiples y complejas en un mundo en “policrisis” y “permacrisis”. Estamos frente a profundos cambios en el orden internacional que se están catalizando con el arribo de la nueva administración en la Casa Blanca, la cual está generando una “revolución” en las relaciones internacionales y cambios profundos en temas sensibles como la paz y seguridad internacional, el comercio, la lucha contra las drogas ilícitas y las migraciones.

Hemos iniciado una etapa que se podría definir en tres palabras: incertidumbre, mutación y conflicto. Para International Crisis Group, el “mundo parece abocado a un cambio de paradigma. La cuestión es si ocurrirá en las mesas de negociación o en los campos de batalla”.

Esta conversión de paradigma representa un cambio de época. Es posible, entonces, identificar al menos ocho grandes tendencias que marcarán el curso de los próximos años y que girarán en torno a: 1) el declive del orden liberal y el surgimiento de uno nuevo aún en reconfiguración; 2) la primacía del unilateralismo frente al multilateralismo; 3) la consolidación de la “ego-política” y los “tecno-magnates” en detrimento de los valores democráticos; 4) el incremento de los conflictos bélicos y la aceleración de la carrera armamentista nuclear; 5) la catástrofe ambiental ante la inoperancia de los mecanismos internacionales; 6) el auge del proteccionismo y las guerras comerciales; 7) las deportaciones y

**«El orden liberal
está siendo
atacado por
nuevos actores
y el efecto es
la creciente
desafección y
la polarización
política»**

las tensiones entre política y Estado de derecho en materia migratoria, y 8) la Inteligencia Artificial y la tecnología como un nuevo campo de batalla.

El orden liberal está bajo ataque, en especial ante el surgimiento y la consolidación de nuevos actores a nivel global, las desigualdades, la intolerancia, la pérdida de autonomía, el cambio discrecional de las reglas de juego, las violaciones a los derechos humanos, las amenazas a la libertad de expresión, entre otros. Su efecto es la creciente desafección y la polarización política.

UNA VISIÓN REGIONAL

AMÉRICA Latina, que había logrado transitar satisfactoriamente por la “tercera ola” y recuperar los valores y principios democráticos, nuevamente se encuentra navegando en medio de una tormenta.

Los calificativos que se asignan hoy a la democracia son numerosos, pero se refieren a un mismo fenómeno incremental y sigiloso: “recesión” y “retroceso”. Estamos frente a una profunda desafección y en un punto de inflexión. Los niveles de movilización y violencia demostrados no tienen precedente. Adicionalmente preocupa la creciente tolerancia y participación de los militares en la vida civil en algunas naciones y su utilización como instrumento para reprimir y alterar el orden constitucional. Los casos recientes en algunos países son más que elocuentes al asignarles tareas de seguridad interna, misiones sociales o la construcción de infraestructura. Este cambio en las relaciones cívico-militares representa una involución para la región.

El peligro es aún mayor por el incremento de países cada vez más autoritarios, cuya lista tiende a crecer. El hilo constitucional se rompió tiempo atrás, bajo la instauración de regímenes iliberales y corruptos que tienen conexiones directas con el crimen transnacional. Esta situación ha sido denunciada y condenada de forma enérgica por la comunidad internacional.

FÓRMULA P+I+D+E

ESTAMOS inmersos en América Latina en un proceso marcado por cinco elementos centrales que configuran lo que podría denominarse la fórmula P+I+D+E = Polarización, Populismo, Incertidumbre, Desconfianza y Estigmatización.

Este fenómeno ocurre en todo el espectro político, tanto en la izquierda como en la derecha, desde el norte de América Latina hasta el sur, pasando por los Andes y algunos Estados petroleros que están siendo azotados, cada vez más, por la pérdida de su capacidad productiva, la pobreza, el delito y el crimen, y la desesperanza de su población.

Venezuela es un claro ejemplo. Sus indicadores lo dicen todo y más: el PIB per cápita en 2024 es similar al de 1997, es decir se quedó estancada en el pasado; la producción petrolera decayó de 3,2 millones de barriles diarios en 1998 a 900.000 en la actualidad; la inflación cerró el año pasado en 48%; la pobreza es superior al 51%; los niveles de prevalencia de subalimentación son superiores al 22%, los más altos de América del Sur; el 4,1% de los niños menores de cinco años sufre desnutrición aguda; la tasa de mortalidad infantil en el país ha aumentado constantemente desde el año 2009; la salud pública redujo en un 70% su capacidad de respuesta desde 2016; el sistema educativo entró en colapso y presenta una alta deserción de maestros en medio de sueldos paupérrimos (menos de diez dólares al mes).

A esta situación debemos agregarle los siguientes elementos: las violaciones graves de los derechos humanos; más de 1.200 presos políticos; segundo país más corrupto del mundo; punto de tránsito y producción de drogas; y epicentro de minería ilegal con un efecto devastador sobre el medio ambiente.

Luego del desconocimiento de los resultados de las elecciones de julio de 2024 y la usurpación del poder en enero de 2025, el dictador ha roto todas las normas básicas de la democracia, la libertad y los contrapesos institucionales. Su único propósito es aferrarse al poder, junto con su círculo más cercano y países aliados de la región y fuera de ella, siguiendo los modelos nicaragüense y cubano de represión.

**«América Latina
está inmersa en
un proceso de
polarización,
populismo,
incertidumbre,
desconfianza y
estigmatización»**

La puerta ha quedado abierta para más violaciones a los derechos humanos, la comisión de crímenes de lesa humanidad, la persecución política y la destrucción material de toda una nación.

Todo parece indicar que la fórmula P+I+D+E, sumada a la variable “V” de Venezuela, ha llevado al país a una situación de caos, a la consolidación de un Estado fallido y una alianza con el narcotráfico (Narcoestado) y el crimen organizado.

La comunidad internacional y latinoamericana no pueden permitirlo. No pueden guardar silencio ni ser cómplices de esta situación. No pueden tolerar que el dictador ponga en riesgo la paz y la seguridad de América Latina.

Es necesario, entonces, actuar bajo el estricto cumplimiento del derecho internacional, reconocer la victoria de la oposición y llevar a cabo una transición democrática. Guardamos la esperanza de que el presidente Edmundo González Urrutia pueda retornar de su exilio forzado y se jure en su tierra natal para asumir constitucionalmente la dirección de la nación.

La paz y la democracia de Venezuela es la paz y la democracia de la región.

DICTADORES 2.0

LAMENTABLEMENTE, la dinámica regional nos revela un camino y una tragedia que avanza silenciosamente, pero con pasos firmes, en medio de la polarización creciente de los últimos veinte años, tal como lo afirma el informe sobre desarrollo humano del PNUD “Romper el bloqueo” (2023/2024).

Cada vez se hace más evidente la tendencia de algunos gobernantes que han llegado al poder por la vía democrática y electoral para deliberadamente minar –desde el interior de los regímenes políticos– las bases de la democracia y el Estado de derecho, así como para coartar las libertades y los derechos civiles, limitando toda opción de alternancia y voz activa de la oposición.

Este proceso representa el fortalecimiento de los nuevos actores antidemocráticos o “adversos a la democratización”, cuyo tema concentra el estudio de destacados politólogos de la región y fuera de ella, como Alberto Vergara, Aníbal Pérez-Liñán y Scott Mainwaring.

En el pasado, los dictadores –como en aquellas novelas que tenían lugar en islas caribeñas– llegaban por la vía armada, los golpes de Estado y, en algunas

ocasiones, se imponían desde el exterior. Ahora, lo hacen desde el interior a través de la boleta electoral, manipulando las reglas de juego y los sistemas electrónicos, haciendo uso de la coerción y desplegando un armamento de desinformación que se potencia en las redes sociales y con las nuevas tecnologías. Son los autócratas en su versión posmoderna 2.0. Su obsesión por el poder y su concentración arbitraria los ha llevado a buscar desesperadamente una “máscara democrática” que oculte su pasado y también su espíritu autoritario, y les permita pasearse por el vecindario, hacer alarde de su “espíritu democrático” y crear falsas ilusiones en poblaciones que cada vez expresan su desilusión y enojo bajo las falsas promesas de inclusión social, desarrollo económico y seguridad.

RIESGOS POLÍTICOS

EN este contexto, es necesario resaltar algunos riesgos políticos que enfrentan nuestras democracias en la región, para analizarlas en su integralidad:

- Crimen organizado y redes del narcotráfico que generan altos niveles de violencia e inseguridad, corroen el Estado de derecho y minan la independencia del poder judicial. Las economías ilícitas como los delitos financieros, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes y la trata de personas se constituyen en uno de los principales focos de inestabilidad para el desarrollo y la convivencia pacífica dentro de los países y entre estos.

- Debilidad institucional y reducida capacidad del Estado para responder a las crecientes demandas de la población, especialmente de los sectores populares y clases medias, y asegurar la prevalencia de la ley. Este agotamiento conduce al debilitamiento de otras instituciones como la rama legislativa y su captura por ciertos sectores.

- Corrupción generalizada que debilita el contrato social y desvía los recursos de inversiones necesarias para el crecimiento sostenido e incluyente.

- Gobernabilidad limitada ante la fragmentación social y una polarización con niveles tóxicos.

- Falta de liderazgo y partidos políticos raquíuticos que han perdido su espacio privilegiado de representación ciudadana y su base social para guiar y ubicarse por encima de intereses individuales y clientelistas.

- Bajo nivel de confianza de la población en sus instituciones y dirigentes.
- Creciente desigualdad social que atenta contra el desarrollo y la prosperidad, al limitar el acceso a servicios básicos, educación, salud e infraestructura. Esta tendencia se agravaría ante los efectos perversos del cambio climático.
- Amenazas a la libertad de prensa y desinformación que limitan y manipulan la rendición de cuentas, así como minan el control ciudadano.

Ante este escenario, que se instaura en un enorme reto, es imperativo alcanzar grandes consensos para brindar soluciones ante los problemas más agobiantes de nuestras sociedades. De no hacerlo, los riesgos son enormes por el costo que implica.

NUEVA OLA DE CRIMEN ORGANIZADO

EL crimen organizado se ha instaurado como uno de los principales problemas de seguridad de América Latina, ante un mundo que se torna cada vez más fragmentado y en cuyo seno organizaciones al margen de la ley toman ventaja de la inestabilidad y vulnerabilidad. Esta tendencia se ha acelerado –como una nueva ola– tras la pandemia del COVID-19 y ha dejado en claro que tiene un carácter estructural, regional y multilateral.

Estimaciones de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional indican que el 82% de la población mundial vive en países con niveles elevados de criminalidad y que están asociados, en su mayoría, con gobiernos autocráticos en África, Asia, Euroasia y los Balcanes. A su vez, el centro de pensamiento *Global Financial Integrity* calcula que los mercados ilícitos generan anualmente ganancias totales que oscilan entre 1,6 billones y 2,2 billones de dólares (2017). No tenemos ningún indicio que nos permita afirmar que estas cifras hayan disminuido a la fecha de hoy.

En este contexto, América Latina se ha convertido en la región más violenta del mundo, cuyos niveles crecientes tienen serias repercusiones en la sociedad. De hecho, el 51% de la población se siente insegura; el 30% de los hogares han sido víctimas de un delito en el último año; una de cada cuatro empresas identifica el crimen como una restricción para hacer negocios; y la población más afectada son las mujeres, niños y niñas, y grupos diversos (Banco Interamericano de Desarrollo).

De acuerdo con analistas, la debilidad de las estructuras de gobierno y los cuerpos de seguridad del Estado, sumado a la apertura de las economías, la permeabilidad de las fronteras nacionales, el acceso limitado a los servicios sociales básicos y una ciudadanía “disponible” a la vinculación, ofrecen un terreno fértil para que operen las organizaciones criminales con mayor fortaleza.

La aproximación al crimen en la región exige un esfuerzo multisectorial, multidisciplinario y holístico para su comprensión, atención y resolución. Su foco debe estar puesto en el análisis de los 15 mercados criminales y en los cinco tipos de actores criminales (integrados en el Estado, redes criminales, grupos de tipo mafioso, extranjeros y del sector privado).

Estos actores han mutado en el tiempo y adoptado las siguientes características: corporaciones criminales que tienen un alcance transnacional, gozan de estructuras fragmentadas, operan de manera diversificada, con una presencia consolidada en múltiples mercados globales y que tienen una enorme capacidad de adaptación e innovación para maximizar sus beneficios. Sus cabecillas tratan de permanecer en el anonimato como mejor fórmula de protección.

Estos funcionan bajo “redes de tráfico” y sistemas de gobierno paralelo que incluso alcanzan a suplantar al Estado en la provisión de servicios sociales y justicia. En otras ocasiones, han capturado los gobiernos locales y regionales. Algunos ejemplos de estas organizaciones criminales son el Tren de Aragua (Venezuela), el cartel de Sinaloa (México), Clan del Golfo (Colombia) y el Primer Comando de la Capital (Brasil).

Este fenómeno, no obstante, va más allá de la producción y tráfico de drogas –cuyo énfasis ha primado en las últimas décadas– e incluye nuevas y diversas aristas de las economías ilegales, como tráfico de migrantes y la trata de personas, armas, minería y explotación ilegales de recursos naturales, y delitos financieros y cibernéticos. Estas actividades, según el Índice Global sobre Crimen Organizado, son las que tienen una mayor prevalencia en la región.

«América Latina se ha convertido en la región más violenta del mundo y eso tiene serias repercusiones en la sociedad»

De acuerdo con Lucía Dammert, profesora de la Universidad de Santiago de Chile y reconocida experta, la interseccionalidad entre pobreza, desigualdad y debilidad institucional propicia la expansión de los mercados ilegales, los cuales amenazan la gobernanza y generan aún más violencia.

EFFECTOS DEVASTADORES

LOS efectos del crimen son devastadores y múltiples. Cabe destacar:

- En términos político-institucionales, tiene un gran efecto en el bienestar de los sistemas democráticos, porque erosiona la confianza ciudadana, las libertades, la cooptación de la justicia, los niveles de corrupción, y la solidez y legitimidad de los Estados. De forma particular, se debe llamar la atención sobre la penetración de los actores de las economías ilegales en la política y el financiamiento de las campañas electorales. Todo ello ha llevado a un deterioro en el apoyo a la democracia en América Latina (sólo la apoya el 52% de la población, según Latinobarómetro), lo cual equivale a retroceder a los niveles de hace 24 años.

- En términos económicos y sociales, tiene una secuela negativa en el crecimiento y la productividad, desvía la inversión privada y pública, y genera desigualdad y pérdida de capital humano y migraciones. De acuerdo con el BID (2024), los costos directos del crimen alcanzaron el 3,44% del PIB de la región. Esto equivale al 78% del presupuesto público para educación, el doble del presupuesto público para asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo. Estas cifras podrían resultar conservadoras, ante la magnitud del problema.

- Genera graves efectos de degradación ambiental y contaminación del suelo, las fuentes hídricas y el aire, al tiempo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades locales. En efecto, la Amazonía ha perdido en las últimas dos décadas más de 54,2 millones de hectáreas de bosques (9% del total), lo cual equivaldría al tamaño de Francia.

Este fenómeno exige, por lo tanto, el diseño de sólidas políticas públicas que promuevan un enfoque estratégico, acciones integrales y abandonar la aproximación exclusivamente punitiva.

El trabajo debe estar dirigido hacia (i) el fortalecimiento de las instituciones, especialmente el aparato judicial y las fuerzas de seguridad e inteligencia, y recuperar el control territorial; (ii) la prevención a través de la inversión en desarrollo social (salud, educación, vivienda, empleo); y (iii) el despliegue de mayores esfuerzos de cooperación internacional.

Desde una perspectiva sistémica es fundamental que las acciones partan de un conocimiento profundo de las dinámicas de los mercados ilícitos, la evidencia y las experiencias del pasado, con el fin de aportar al combate de la corrupción y la impunidad, y proteger la sociedad civil y las poblaciones jóvenes y más vulnerables.

Se requiere el trabajo conjunto de los gobiernos, academia, sector privado, sociedad civil y comunidad internacional. Pero, ante todo, se requiere voluntad y decisión política para combatir el crimen organizado bajo un estricto respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.

EL ROL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

LOS retos democráticos y de seguridad exigen una comunidad internacional más fuerte y coordinada, que ejerza un rol constructivo.

Estos esfuerzos externos deben complementar –y no sustituir– las tareas internas que cumplan las diferentes entidades del Estado, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, entre otros. La tarea empieza, en todo caso, por casa.

La lucha contra el crimen organizado requiere, a su vez, revisar la eficiencia de los actuales esquemas de cooperación al interior de los países (inter-agencial) y entre Estados para construir una mayor capacidad de trabajo hemisférica sobre la base de un plan de acción concreto y holístico. En tal sentido, para Erika Rodríguez Pinzón, directora de la Fundación Carolina, las políticas de seguridad requieren una gobernanza multinivel que involucre al plano nacional (o estatal), al transnacional, al regional y al ámbito subregional.

Se necesita un mayor conocimiento de las singularidades de los grupos criminales, sus niveles de sofisticación y operación, para poder afrontar un fenómeno que no tiene límites y es cada vez más versátil.

**«Para combatirlos,
hay que conocer
mejor las
singularidades
de los grupos
criminales,
sus niveles de
sofisticación y
operación»**

Los esfuerzos deben estar enfocados a intensificar el diálogo entre autoridades, el control y la prevención de los mercados, así como fortalecer las capacidades institucionales y debilitar las estructuras financieras. Resulta fundamental subsanar los vacíos legales, actualizar las convenciones internacionales y los organismos multilaterales que han quedado rezagados frente a la velocidad del crimen organizado.

La defensa de la democracia y los derechos humanos a nivel hemisférico exige que la Organización de Estados Americanos (OEA) cumpla un rol vigoroso y sus acciones tengan un mayor eco e impacto en el vecindario. Se necesita, ahora más que nunca, que la organización recupere su ím-

petu, una visión equilibrada y un liderazgo que esté al margen de las corrientes ideológicas de turno.

El Sistema Interamericano deberá continuar desempeñando un papel fundamental en la implementación de una nueva agenda. Estamos en la obligación de preservarlo y proyectarlo.

La actualización de la Carta Democrática Interamericana y la negociación de un protocolo adicional es una necesidad. Esta tarea debe buscar, bajo la preservación del espíritu constitutivo del 11 de septiembre de 2001, hacerla más operativa y tener herramientas y cláusulas para enfrentarse a las nuevas amenazas a la democracia procedentes de gobiernos autoritarios que llegaron al poder por la vía electoral, así como contrarrestar los desafíos de los populismos emergentes.

Las amenazas provienen no solo del exterior, sino también del interior mismo de los Estados. Esta actualización permitiría tener una mirada de futuro y afrontar una realidad: el texto quedó anclado en el pasado y el procedimiento le está ganando a la democracia y, por ende, generando enorme frustración y riesgos. La ruta a seguir está marcada por la decisión política que tomen los gobiernos y la reafirmación de su vocación de principios liberales.

Los principios y valores democráticos son irrenunciables y sus miembros deben ponerse de acuerdo para liderar esta ofensiva. Los países de la región tienen una responsabilidad que cumplir hacia adelante. Colombia no puede estar ausente y debe estar a la altura de las circunstancias y de su tradición diplomática, más aún cuando tiene el reto de administrar la instauración de una dictadura en el país vecino, con el que comparte no sólo más de 2200 kilómetros de frontera, sino también una hermandad histórica. La región del Catatumbo será la prueba de defensa de la soberanía y los intereses nacionales, o la coexistencia con el delito transnacional.

La gran pregunta es si los cambios en la geopolítica alterarán el rumbo del multilateralismo, la democracia y el sistema interamericano, en particular la OEA. ¿Se terminará marchitando, a través de trabas y excusas presupuestarias y administrativas? ¿Existirá voluntad política para fortalecerla y evitar que caiga en la irrelevancia? Se requerirá un enorme esfuerzo, visión e inteligencia para avanzar, sin compás de espera, en la defensa de la democracia, la lucha contra las autocracias y el logro de una mayor unidad regional.

UNA AGENDA HACIA FUTURO

ESTAMOS frente a una doble tendencia, por un lado de erosión y retroceso democrático y, por otro lado, de profundización del autoritarismo, de acuerdo con el politólogo Larry Diamond, de la Universidad de Stanford, en California.

En el futuro, el avance de la democracia está condicionado al trabajo que se realice en diversos frentes multidimensionales, lo que requiere garantizar el Estado de derecho y la separación de poderes como pilares de la convivencia pacífica y la defensa de las libertades fundamentales.

Los siguientes puntos requieren acción urgente para repensar y rebobinar la democracia en América Latina:

- La construcción de una concepción integral de democracia que vaya más allá de un gobierno de las mayorías y de elecciones libres y transparentes. Se deben incorporar condiciones fundamentales que estén relacionadas con los derechos humanos, económicos, libertades de expresión y prensa, y participación ciudadana. Asimismo, nuevos ángulos como la protección ambiental y la era digital, serán vitales.

– La adopción de nuevos contratos sociales que sean producto de amplios consensos y contribuyan a un desarrollo sustentable, estable, equitativo y democrático. Es decir, se necesita un régimen de bienestar más inclusivo y con base en acuerdos específicos, tal como lo han sugerido la Cepal (Comisión Económica para América Latina) y la OCDE.

– El fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para brindar resultados y soluciones concretas y oportunas a los problemas más agobiantes de la población y su desarrollo. Ello incluye la reforma del Estado, que permita preservar los equilibrios de poder, la gobernanza y gobernabilidad, y recuperar la confianza de los ciudadanos. Se necesitan instrumentos eficientes y canales efectivos entre gobernantes y ciudadanos. La seguridad ciudadana y la desarticulación de las redes criminales del narcotráfico y economías ilícitas en el Estado y la sociedad son asuntos que requieren la mayor atención. Es fundamental proteger la independencia judicial como pilar para una democracia de calidad.

– La reforma del sistema político y electoral con el fin de fortalecer los partidos y congresos, así como blindar los organismos electorales ante cualquier ataque. Al respecto, se deben abrir nuevos espacios de participación ciudadana ante la irrupción de tecnologías emergentes y las dinámicas de comunicaciones más horizontales. La inclusión de segmentos aislados y vulnerables de la población como las minorías étnicas no puede tardar para asegurar su empoderamiento y participación. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser la norma.

– La profundización de una comunidad hemisférica –bajo los principios de multilateralismo y diálogo– para fortalecer el respeto, la defensa y la promoción de la democracia, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. De forma particular, se requiere construir nuevas alianzas regionales y reforzar los mecanismos de defensa.

CONCLUSIONES

LA defensa y el fortalecimiento de la democracia de América Latina es un imperativo político, ético y moral. A pesar de sus dificultades, es necesario mantener una visión optimista y preservar el buen estado de salud de nuestros regímenes políticos.

Frente a las nuevas amenazas políticas se requiere una gran visión de futuro, dosis de liderazgo y, ante todo, repensar y fortalecer colectivamente las reglas e instituciones existentes.

Estamos en la obligación de proteger, tal como lo ha subrayado Chris Patten, exrector de la Universidad de Oxford, los valores fundamentales y los controles y equilibrios institucionales e intelectuales para asegurar la confianza y la integridad del tejido democrático de nuestras sociedades.

América Latina no puede perder el terreno ganado durante las últimas décadas y, menos, pasar a ocupar un lugar irrelevante en el concierto internacional.

La democracia se fortalece con más democracia y en democracia. Esta es la clave para salir del túnel. 

Ampliar información

Puede acceder a artículos relacionados con el tema escaneando el código QR.

La maldición latinoamericana.

(Carlos Granés)

VER EL ARTÍCULO

La UE y Latinoamérica en la geopolítica del siglo XXI.

(Anna Ayuso)

VER EL ARTÍCULO